

RESISTENCIA COMUNITARIA COMO EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DIÁLOGO SOCIAL EN EL CAÑÓN DE LAS HERMOSAS (COLOMBIA)

Community resistance as an experience of peacebuilding and social dialogue in the Cañón de las Hermosas (Colombia)

DEBORAH PRESTA NOVELLO*
ANDRES TAFUR VILLARREAL**

Resumen: El Cañón de las Hermosas está ubicado en el centro de Colombia, sobre una de las ramificaciones de la Cordillera de los Andes. Allí se concentraron varios de los síntomas más recurrentes en el diagnóstico del conflicto armado en Colombia: pobreza, desigualdad, precariedad y debilidad institucional, control social y territorial de los grupos armados, disputas por rentas ilegales derivadas del cultivo y tráfico de drogas ilícitas, e impactos sobre la territorialidad y el territorio. En un clima completamente adverso, la propia comunidad ha sido capaz de poner en marcha varios mecanismos de resistencia civil para la protección de la población que han sido reconocidos como plataformas eficaces orientadas al diálogo social y la construcción de paz.

Palabras Clave: resistencia civil; orden social; autonomía civil en guerras civiles; conflicto armado; paz territorial.

Abstract: The Cañón de las Hermosas is located in the center of Colombia, on one of the ramifications of the Andes Mountain Range. Several of the most recurrent symptoms in the diagnosis of the armed conflict in Colombia were concentrated there: poverty, inequality, precariousness and institutional weakness, social and territorial control of armed groups, disputes over illegal income derived from the cultivation and trafficking of illicit drugs, and impacts on territoriality and territory. In a completely adverse climate, the community itself has been able to launch various civil resistance mechanisms for the protection of the population that have been recognized as a effective platforms aimed at social dialogue and the construction of peace.

Keynotes: civil resistance; social order; civil autonomy in civil wars; armed conflict; territorial peace.

Sumario: Introducción. I. Interrelaciones entre guerra civil, orden social y autonomía comunitaria. 1.1. El orden social en las guerras civiles. 1.2. Resistencia comunitaria y autonomía

*Investigadora posdoctoral de la Universidad de Lleida (España). Beca Margarita Salas para jóvenes doctores. Ministerio de Universidades de España, financiado por la UE (NextGenerationEU). ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5990-7588>. Correo electrónico: deborah.presta@udl.cat

**Profesor investigador. Director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima (Colombia). ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2497-4016>. Correo electrónico: jatafurv@ut.edu.co

civil. II. La dinámica del conflicto armado en el sur del Tolima. 2.1. La violencia en el sur del Tolima. 2.2. Un clima de baja institucionalidad y alta ilegalidad. III. Caso de estudio: resistencia comunitaria en el Cañón de las Hermosas. 3.1. Contextualización. 3.2. Bonanza de la amapola y gobernanza rebelde. 3.3. Mecanismos de resistencia civil. Conclusiones: con recomendaciones para lograr la paz territorial. Bibliografía

Introducción

El sur del Tolima ha sido uno de los grandes escenarios del conflicto armado en Colombia. La fundación y presencia casi hegemónica del grupo guerrillero de Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ha implicado históricamente que el Estado se haya propuesto ganar este territorio como uno de sus principales objetivos en la lucha contrainsurgente. El vacío institucional promovió la coexistencia de la guerrilla con los grupos paramilitares y el desarrollo de formas propias de economía y regulación social al margen del Estado. En este contexto, desde las comunidades han aparecido distintas formas de resistencia y acción colectiva que han contribuido a la construcción de paz en el sur del Tolima.

La zona rural del Cañón de las Hermosas se ha constituido como un referente histórico para las luchas campesinas. Estas montañas han sido uno de los epicentros de la resistencia civil, a través de distintas formas de organización social. Esta zona ha sido un importante escenario del conflicto armado colombiano, que ha pasado por distintas etapas y derivado en que las propias comunidades fueran capaces de transformar su contexto gracias a una conciencia organizativa.

A través de este estudio se analiza cómo, en un contexto fuertemente marcado por la violencia y con condiciones muy negativas para su población, la propia comunidad local ha sido capaz de organizarse y promover cambios significativos en las dinámicas de victimización, producto de la confrontación armada, y en el mejoramiento de la convivencia en el territorio.

Las experiencias que trataremos son conocidos como la Mesa de Transparencia y el Observatorio de Derechos Humanos para la Protección del Medio Ambiente, a través de los cuales distintos líderes comunitarios lograron generar un espacio de interlocución con distintos actores institucionales, reconocido por analistas y ex defensores de derechos humanos como una experiencia significativa de construcción de paz territorial y de diálogo social.

I. Interrelaciones entre guerra civil, orden social y autonomía comunitaria

1.1. El orden social en las guerras civiles

La teoría de los microfundamentos de la guerra civil de Statis Kalyvas define este fenómeno como un combate armado dentro de los límites de una entidad soberana reconocida, entre partes sujetas a una autoridad común al comienzo de las hostilidades¹. La intuición que interesa a este trabajo es la violenta división física de la entidad soberana en campos rivales armados, y la división territorial de facto que esta conlleva:

“Los conflictos que constituyen guerras civiles como mejor pueden definirse es como aquellos que se relacionan con la quiebra efectiva del monopolio de la violencia por medio del desafío interior armado. La disputa armada de la soberanía conlleva pretensiones de autoridad mutuamente excluyentes, que producen una situación de soberanía dividida o dual”².

Para algunos autores todas las guerras civiles, en esencia, son una batalla por el control entre un gobierno y sus competidores sobre los civiles y el territorio en el que residen³. Los actores contraestatales, como las guerrillas, podrían simplemente matar y abusar, pero a menudo deciden gobernar, estableciendo un tipo de regulación mínima fincada sobre un tipo de control y extracción informal, hasta la formación de burocracias elaboradas, escuelas, juzgados y hospitales. Los civiles, por su parte, tienen sus propios intereses y, aunque desarmados, tienen la capacidad de influenciar sobre cómo se los gobierna.

Zachariah Mampilly acuñó el concepto de gobernanza rebelde para referirse no sólo a las estructuras que proporcionan determinados bienes públicos, sino también a las prácticas de gobierno que se adoptan. Estas pueden ser *ad hoc* (informales) o burocráticas (formales)⁴. Para significar el control de territorios por parte de rebeldes, refiere en este contexto al abanico de posibilidades de organización, autoridad y responsabilidad que se crea entre guerrilleros y civiles⁵.

De acuerdo con Arjona el gobierno rebelde -o el orden social durante la guerra- puede tomar una de dos formas. La primera es la *rebelocracia*, o el gobierno de los rebeldes, y esta se da cuando los grupos armados intervienen ampliamente en los asuntos civiles, regulando el comportamiento más allá de las esferas de la fiscalidad y la seguridad. Un claro ejemplo se da cuando los combatientes regulan la conducta pública y privada, estableciendo un sistema de justicia para adjudicar disputas y hacer cumplir contratos, así como para

¹ Statis Kalyvas, *La lógica de la violencia en la guerra civil*, (Madrid, Akal, 2006), 35-36.

² *Ibidem*

³ Ana Arjona, Nelson Kasfyr y Zacariah Mampilly, *Rebel Governance in Civil War* (Cambridge: University Press, 2015).

⁴ Zacariah Mampilly, *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life During War* (New York: Cornell University Press, 2011), 4.

⁵ El texto original en inglés es el siguiente: “to not only the structures that provide certain public goods but also the practices of rule insurgent adopt. These can be either *ad hoc* (informal) or bureaucratic (formal) (...) the range of possibilities for organization, authority, and responsiveness created between guerrillas and civilians”. *Ibidem*.

proporcionar bienes públicos⁶. La segunda es la *aliocracia*, o el gobierno de otros. En este caso los grupos armados sólo intervienen en los asuntos civiles recaudando impuestos y regulando las conductas relacionadas con la seguridad, mientras que otros actores, ya sean las autoridades civiles, las instituciones estatales o los líderes tradicionales, regulan el resto de los aspectos de la vida local⁷.

Sobre la base de estas reflexiones, es claro que del lado de los grupos armados no es fortuita la organización de instituciones o la formación de alianzas con actores locales, ya que la regulación de los territorios es una prioridad para alcanzar sus objetivos estratégicos, militares y políticos. Del lado de las comunidades, algunos trabajos permiten ver que hay un importante espacio para la resistencia y la acción colectiva, lo cual, aunado a ciertas condiciones, puede incidir en la dinámica del conflicto armado y por supuesto, en la construcción de paz⁸.

1.2. Resistencia comunitaria y autonomía civil

Parece relevante la búsqueda de una respuesta a la manera en que los civiles pueden conservar su autonomía (o autogobierno), a pesar de los grupos armados, y al mismo tiempo, protegerse a sí mismos. Esta cuestión, a su vez, se vincula a otra cuestión más amplia acerca de la capacidad que tienen los civiles para la cohesión social y la cooperación en contextos de guerra⁹. Esta idea se emparenta con el argumento de Ana Arjona en la distinción analítica entre *rebelocracia* y *aliocracia*. El capital social es lo que explica que los civiles superen el temor, manejen sus propias comunidades y lidien con la presión de los grupos armados de manera perdurable.

El argumento de Kaplan, es que bajo ciertas condiciones, los civiles pueden recurrir a procesos sociales para reducir la violencia perpetrada en su contra:

“este argumento se basa en la sociedad civil [...] al considerar por qué los civiles no involucrados en el conflicto armado logran o no logran organizar modos de resistencia contra la opresión estatal o contra un movimiento insurgente potencialmente perjudicial (...) mi argumento es que la cohesión social les ofrece a los civiles más oportunidades para superar el miedo, romper la “ley del silencio”, revivir la comunicación e implementar estrategias colectivas de protección (...) La violencia se puede mitigar mediante soluciones *institucionales* que buscan evitar la participación de la población civil en el conflicto,

⁶ “...where armed groups intervene broadly in civilian affairs, regulating behavior beyond the spheres of taxation and security. For example, combatants may regulate public and private conduct, establish a justice system to adjudicate disputes and enforce contracts, and provide public goods”, Ana Arjona, *Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War*, (Cambridge: University Press, 2016), 10.

⁷ “...where armed groups only intervene in civilian affairs by collecting taxes and regulating conducts related to security, while others – such as civilian authorities, state institutions, or traditional leaders – regulate the remaining aspects of local life”. *Ibidem*.

⁸ Cfr. Oliver Kaplan, *Resistir la guerra: o como se protegen a sí mismas las comunidades*, Traducción Enrique Valenzuela Gruesso, (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2020).

⁹ *Ibid*, 20.

manejar el orden interno de las comunidades, limitar la incursión de los grupos armados y exigirles rendir cuentas de sus actos”.¹⁰

Esta teoría sobre la toma de decisiones de civiles en las guerras civiles se divide en dos partes, una asociada a las condiciones para la autonomía y la cohesión social, y la otra a los mecanismos civiles generadores de protección. En relación con la primera cuestión podemos destacar tres datos relevantes.

En primer lugar, el papel que juegan desde la asistencia técnica actores externos como el gobierno, las iglesias y las ONG es clave para que las comunidades se organicen. En segundo lugar, en línea con el argumento descrito anteriormente, las comunidades cohesionadas y organizadas despliegan dos tipos de estrategias para lidiar con los diversos riesgos que conlleva para su integridad una guerra civil. Estas son las armas de los débiles, básicamente para resolver las disputas y divisiones al interior de las comunidades; y las armas de los no tan débiles, como las protestas, entre otro tipo de acciones públicas no violentas. La elección de las estrategias está determinada por una interacción entre las preferencias civiles, la cohesión social y el contexto previo y potencial de amenazas¹¹. En tercer lugar, el conjunto de las primeras dos condiciones descritas, a saber, la fortaleza de la organización civil y las estrategias seleccionadas, sumado a los incentivos del grupo armado¹², van a determinar los resultados significativos sobre los niveles de violencia.

Desde el punto de vista de los mecanismos, siguiendo a Kaplan, estos se pueden agrupar de acuerdo con su nivel de formalización y con la profundidad de la cooperación:

“Primero, algunos mecanismos de cohesión y solidaridad más parecen una coordinación *ad hoc*, por cuanto son menos premeditados o duraderos. Estos pueden hacer parte de una armonía social preexistente, lo que implica que hay menos conflictos entre vecinos para explotar o que el conocimiento compartido entre los pobladores les permite protestar de manera colectiva y espontánea contra la agresión y resistir los intentos de dominación por parte del grupo armado.

¹⁰ *Íbid*, 26.

¹¹ *Íbid*, 27.

¹² Aun cuando este trabajo desplaza la atención hacia los civiles y su acción, señala Kaplan, “...sus resultados no se pueden desligar de los grupos armados, cuyos objetivos e incentivos, preferencias y opciones, son claves para explicar la violencia ejercida en contra de las comunidades. En parte, los grupos armados coaccionan o cometen abusos contra las poblaciones porque sus acciones tienen pocas consecuencias, porque poseen escasa información o porque no han considerado otras formas de lograr sus objetivos. (...) Los móviles del actor armado dan un idea sobre cuándo es probable que los esfuerzos ciudadanos sea exitosos y sugieren un amplio pero delimitado conjunto de condiciones de conflicto y perfiles de opciones o preferencias del grupo armado. La capacidad de las comunidades para disminuir la violencia y aumentar la sobrevivencia de los civiles debería ser mayor en zonas en donde, pese a tener incentivos para ejercer la violencia, los grupos armados tienen preferencias relativamente más flexibles y con la imposición de costos reducidos pueden ser persuadidos a cambiar su conducta (...). En contraste, es probable que los civiles sean menos capaces de evitar la violencia en los casos en los que los grupos armados están resueltos a matar o ganar, como en los genocidios (...)” *Íbid*, 29. En términos del mismo autor, estas condiciones de oportunidad para la autonomía le añaden una dosis de realismo a la discusión, al no postular el éxito de los civiles como inevitable.

Segundo, existen organizaciones y mecanismos formales basados en una cooperación profunda y sostenida y orientada hacia la protección. Los civiles pueden promover entre los pobladores normas e ideas contra la cooperación con los grupos armados (una denominada cultura de paz), desarrollar procesos locales de resolución de conflictos (para evitar recurrir a actores externos para mantener el orden), desarrollar sistemas de alerta temprana para eludir los combates, dialogar con los actores armados, investigar a los sospechosos de colaborar con el enemigo y vincularse a organizaciones no gubernamentales externas (ONG) y a organizaciones intergubernamentales internacionales (OGI) para “salir a la luz pública”, denunciar la agresión y avergonzar a los actores armados¹³”.

II. La dinámica del conflicto armado en el sur del Tolima

2.1. La violencia en el sur del Tolima

El departamento del Tolima, ubicado en la zona transandina de Colombia, es ampliamente reconocido en diversas representaciones de la guerra colombiana, porque en el extremo sur de su territorio, en Marquetalia, nació la guerrilla de las FARC¹⁴. Sin embargo, en esta zona caracterizada por la carencia de instituciones gubernamentales, la desigualdad social, el desarrollo desequilibrado y la pobreza generalizada¹⁵, no solo nació la guerrilla, sino que fue desde mediados del siglo pasado un laboratorio para la práctica de los manuales norteamericanos de contrainsurgencia, en lo tocante a la relación orgánica entre civiles y militares para enfrentar a las guerrillas comunistas¹⁶.

Esta región ha sido escenario de varios periodos de intensa violencia. En los años 1930 y 1940 se desarrollaron conflictos entre colonos y hacendados por la tierra. Una década después, campesinos liberales y comunistas se refugiaron en las montañas del sur y del oriente del departamento, en donde constituyeron organizaciones de autodefensa para enfrentar a los terratenientes y a los conservadores en el gobierno¹⁷. Luego de las amnistías ofrecidas por la dictadura militar (1953-1958) y el primer gobierno de la transición a la democracia (1958-1962), los campesinos liberales se convirtieron en la primera línea de defensa del

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ En los relatos de los fundadores de esa guerrilla, así como en diversos trabajos académicos y en el reciente informe de la Comisión de la Verdad, se ubica el nacimiento de esta guerrilla en el sur del Tolima, en la vereda de Marquetalia, municipio de Planadas.

¹⁵ Centro de Estudios Regionales, CERE-UT, *Análisis de la complejidad socio-ecológica del Tolima: identificación de los vínculos entre paisaje, socioeconomía y conflicto armado*. Informe de investigación CERE, n°1, (Universidad del Tolima, Ibagué, noviembre de 2020), 16.

¹⁶ Andrés Tafur-Villarreal, “Víctimas y disputas: el saldo de la violencia paramilitar y contrainsurgente en el Tolima (Colombia)”, *El diario de la educación*, (2020).

¹⁷ La denominación de campesinos liberales, o “limpios”, y campesinos comunistas, o “comunes”, tiene que ver con su militancia en los partidos liberal y comunista.

establecimiento contra los campesinos comunistas, caracterizados por las élites frentenacionalistas como el enemigo interno¹⁸.

La alianza entre los campesinos liberales y la Fuerza Pública se legalizó en 1965, cuando el presidente Guillermo León Valencia (1962-1966) expidió el Decreto 3398, “por el cual se organiza la defensa nacional”, en el que señalaba que “la movilización y la defensa civil (...) corresponden a la Nación entera” y obligaba a los particulares a participar en la defensa del país. El mismo año, Valencia ordenó la operación militar a Marquetalia -una de las denominadas “Repúblicas independientes”¹⁹-, zona de control de los comunistas, quienes, tras la arremetida del Ejército, se convirtieron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La naciente guerrilla se definía como una organización armada cuyo objetivo era la toma del poder por las armas, sobre la base de un programa de gobierno revolucionario que incluía una reforma agraria. Se conformó en seis núcleos en distintas regiones del país, cuyo Bloque Sur correspondía a un área de operaciones en los departamentos de Tolima, Huila, y Valle del Cauca.

El gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), tercero en la sucesión frentenacionalista, convirtió en legislación permanente la autodefensa civil anticomunista, a través de la Ley 48 de 1968. En la jerga del *Reglamento de guerrillas y contra guerrillas del Ejército (1968)*:

“La junta de autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que amenacen el área o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate (...) la junta de autodefensa debe tener un control directo de la unidad militar de la zona de combate y para ello el comandante designa un oficial o un suboficial encargado de transmitir las órdenes correspondientes y de entrenar la agrupación”²⁰.

De acuerdo con el Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Universidad del Tolima (2020), entre 1965 y 1982, el Tolima, y en particular el sur, vivió un periodo de tregua, producto del relativo equilibrio entre los actores armados. Los grupos de autodefensa conformados a partir de las estructuras de limpios establecieron controles sobre la población civil y mantuvieron a los

¹⁸ El Frente Nacional fue un pacto político de los partidos liberal y conservador, que acordaron compartir el poder político de manera exclusiva durante 16 años, periodo durante el cual se distribuyeron de manera equitativa los cargos de la rama ejecutiva y judicial. Del pacto frentenacionalista fueron excluidas terceras fuerzas y facciones críticas dentro de los dos partidos tradicionales. Cfr. Déborah Presta Novello, *El conflicto de Colombia. Acción de las Organizaciones internacionales*, (Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020).

¹⁹ Esa era la manera como los operadores políticos en el nivel nacional se referían a las zonas que, desde su punto de vista, se mantenían bajo el control de los comunistas. Aparte de la RI de Marquetalia en el sur del Tolima, se hablaba de las de Riochiquito, en el Cauca; la del Pato, entre Huila y Caquetá, y Guayabero, entre el Meta y el Guaviare.

²⁰ Juan Esteban Ugarriza y Nathalie Pabón, *Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958-2016*, (Bogotá, Universidad del Rosario, 2018), 126.

comunistas -ahora convertidos en la guerrilla de las FARC- confinados a las zonas más aisladas de la región.

De manera que, en esta región el paramilitarismo nacía a la par con la guerrilla que debía confrontar. Veinte años después, en todo el sur del Tolima operaban tres grupos de paramilitares, bien articulados con la Fuerza Pública, que serían la base para la creación del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia en la década de 1990²¹. La guerrilla de las FARC, por su parte, consolidarían su presencia casi hegemónica en la zona, catalogada por la prensa y los analistas del conflicto armado como su retaguardia o su *santuario*²².

La guerrilla aprovechó las ventajas que el territorio le ofrecía para realizar su despliegue, utilizarlo como refugio, llegar al reabastecimiento de sus cuadrillas y, muy importante, convertir esta zona en una red de importantes corredores que la conectan con otros departamentos desde la Amazonía hasta el Pacífico. Este hecho promovió que fuera sede del Estado Mayor del Comando Conjunto Central y, después de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, fundador y máximo comandante durante cuatro décadas, refugio del número uno de la organización, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano²³.

2.2. Un clima de baja institucionalidad y alta ilegalidad

Cuando un grupo armado accede y se consolida en un territorio, es importante destacar de qué manera se desarrollaron los hechos, ya que esto marca fuertemente su relación con las comunidades y las dinámicas regionales. En muchas partes del territorio nacional, las FARC lograron forjarse un apoyo desde los tiempos en que propiciaron la colonización armada. En el sur del Tolima, este grupo guerrillero utilizó un discurso marxista y labores de entrega hacia la causa revolucionaria y de reivindicación de derechos, combinando aspectos ideológicos y políticos con estrategias militares. En los inicios de su presencia en esta zona se consolidaron como una institucionalidad paralela, apoyaron las luchas sociales asociadas a la tenencia de la tierra y fortalecieron su influencia gracias a la construcción de relaciones de cooperación con la población local. Esta relación compleja era indispensable para asegurar el control sobre los corredores estratégicos²⁴.

Debido a la notable incapacidad del Estado en el territorio, la gestión política, económica y social de los municipios del sur del Tolima se ha visto altamente permeada por intereses clientelistas y criminales. Los grupos armados ilegales han

²¹ Centro Nacional de Memoria Histórica, *De los grupos precursores al Bloque Tolima. Informe N. 1 Serie sobre los orígenes de los grupos paramilitares de las regiones*, (Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

²² El Espectador catalogó el Cañón de las Hermosas en el sur del Tolima como “La segunda Casa Verde de las FARC”. María del Rosario Arrázola, *La nueva Casa Verde de las FARC*, El Espectador, 17 de octubre de 2009.

²³ Fundación ideas para la paz (FIP), *Institucionalidad socavada. Análisis transversal*, (Bogotá, 2015), 19.

²⁴ *Ibid.*, 21.

logrado incidir directamente en las decisiones territoriales a través, principalmente, de dos maneras. En el caso de las FARC, por medio del quiebre del orden público y el ejercicio de su poder de veto sobre las autoridades públicas municipales, así como la presión sobre comunidades y tomadores de decisión para incidir en la inversión hacia zonas y poblaciones bajo su dominio. En el caso de los paramilitares, a través de su inserción en el aparato municipal con el propósito de manejar directamente el gobierno local, y así garantizarse la captura de las rentas públicas²⁵.

En este tipo de regiones la desconfianza entre las personas de las comunidades produjo distorsiones entre los conceptos de legalidad e ilegalidad. La consolidación de economías criminales ha sido posible gracias a la reproducción de la ilegalidad. El clima que se gestó históricamente fue impulsado a su vez por la desconfianza en la capacidad punitiva de las instituciones, lo cual generó una visión viciada de los beneficios que acarrear los comportamientos delictivos y el poco riesgo de sanción penal. Además, esta situación de ilegalidad se vuelve más compleja y grave al coexistir grupos armados con capacidad para imponer sus propias reglas, una ausencia de rechazo social y moral de dicha ilegalidad, y la existencia de acuerdos entre agentes institucionales y grupos ilegales²⁶.

Para el caso de las FARC, su presencia histórica y casi hegemónica en el territorio, posibilitó redes de relaciones estrechas con la población civil -muchos guerrilleros y milicianos eran de la propia región-, lo que construyó una percepción del Ejército Nacional como una fuerza de ocupación. Esto promovió una desconfianza de la población hacia la Fuerza Pública, que no deja de estar motivada por la propia actitud hostil y estigmatizante de su comandancia hacia los civiles, el consumo de droga y alcohol intrafilas, su actitud permisiva con los paramilitares, prácticas como las capturas masivas y crímenes altamente cuestionados como las ejecuciones extrajudiciales²⁷.

Esta relación con la población, unida a la débil presencia institucional, le permitió a la guerrilla hacerse con el control de la región y construir instituciones para la regulación de la economía ilegal, la convivencia y la seguridad. Los civiles, en línea con los aportes teóricos citados anteriormente, constituyeron de esta manera un factor elemental en el desarrollo de la guerra, entendida como una

²⁵ Red RINDE, *Fortalecimiento de la descentralización. El gran reto de Colombia 2010-2014*, (Noviembre 2013), 8.

²⁶ Adolfo Eslava, *Oro como fortuna. Instituciones, capital social y gobernanza de la minería aurífera colombiana*. (2014, Medellín, Universidad EAFIT), 16.

²⁷ Las capturas masivas fueron una de las estrategias más polémicas de la política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe, basadas en la detención indiscriminada de líderes comunitarios a quienes se señalaba de ser colaboradoras de la guerrilla. Las ejecuciones extrajudiciales, divulgadas en prensa como “falsos positivos”, son crímenes de lesa humanidad atribuidos a las fuerzas militares colombianas y que comprometieron el asesinato de civiles para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Para el caso del Tolima, Cfr. Colectivo de Abogados José Albeiro Restrepo, Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Universidad del Tolima, *Más que estadísticas. Las ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Tolima, 2002 - 2015*. (Bogotá: Colectivo de Abogados José Albeiro Restrepo, 2021)

confrontación por el control del territorio, la población y sus recursos. Además de proveer seguridad, establecer reglas para la explotación de los bienes comunes y regular la convivencia de los pobladores, el grupo armado logró convertirse en el garante del orden social, como un *estado paralelo*, orientado hacia el control y la administración²⁸.

Es importante mencionar, en todo caso, que la guerrilla no siempre se relacionó con los civiles sobre la base de acuerdos, sino que en varios casos se impuso por la fuerza o uso de manera desproporcionada su poder de fuego en contra de poblaciones a las que estigmatizó por su supuesta colaboración con los paramilitares y el Ejército²⁹. Este es el caso de los corregimientos de Puerto Saldaña, en el municipio de Rioblanco, y de Santiago Pérez, en Ataco, en donde el grupo guerrillero desarrolló, con sevicia, operaciones de tierra arrasada que terminaron en asesinatos selectivos, masacres y el desplazamiento masivo de la población civil³⁰.

Pese a la persistencia de todos los fuegos, y de que la capacidad de autonomía civil se viera altamente comprometida en los territorios en los que la guerrilla, los paramilitares y la Fuerza Pública se enfrentaron violentamente, las comunidades resistieron, protestaron y en algunos casos, lograron establecer mecanismos de resistencia y autonomía que les permitieron construir acuerdos para su protección³¹.

III. Caso de estudio: resistencia comunitaria en el Cañón de las Herosas

3.1. Contextualización

El Cañón de las Herosas se encuentra en una zona de amortiguamiento del Complejo de Páramos del Parque Nacional Natural que lleva su mismo nombre, ubicado sobre el flanco oriental de la Cordillera Central, transversal a los

²⁸ Sobre el orden social fariano en el sur del Tolima, se pueden ver los trabajos de Andrés Aponte, *Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1048-2016*, (CINEP, EDUCAPAZ, Universidad Javeriana, Bogotá, 2019); Observatorio de Paz y Derechos Humanos, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, *Contextos explicativos del desplazamiento forzado en el sur del Tolima. Impactos sobre el territorio y la territorialidad 1958-2018*, (CODHES, Bogotá, 2020); y Juan Esteban Ávila y Geraldine Navarro, *Construcción de Estado, guerra civil y orden social en el corregimiento de las Herosas, Chaparral-Tolima 1991-2016*, (Universidad del Tolima, Ibagué, 2022).

²⁹ Cfr. Déborah Presta Novello, “Crisis humanitaria en la Triple Frontera Amazónica: retos de desarrollo sostenible”, (*Anales de Derecho*, 39, Universidad de Murcia, 2022).

³⁰ Sobre el desplazamiento forzado en el sur del Tolima, ver el caso particular de Santiago Pérez en Andrés Tafur Villareal y Alejandro Mejía Baldión, “Limitantes y posibilidades para la reparación transformadora de los daños comunitarios generados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado de población. El caso del Sujeto de Reparación Colectiva de Ataco, Tolima”, en Angela Marcela Olarte Delgado y Marcela Gutiérrez Quevedo (editoras), *Cátedra Unesco Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y gobernanza*, (Publicaciones Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2021).

³¹ Varios trabajos recientes se han concentrado en la visibilización de estas experiencias de resistencia y autonomía comunitaria en el sur del Tolima. Ver, entre otros, John Jairo Uribe Sarmiento, Iokiñe Rodríguez Fernández y Jairo Baquero Melo, *Paces desde abajo. Desafíos y oportunidades de otra paz*, (Ed. Universidad del Rosario, 2022).

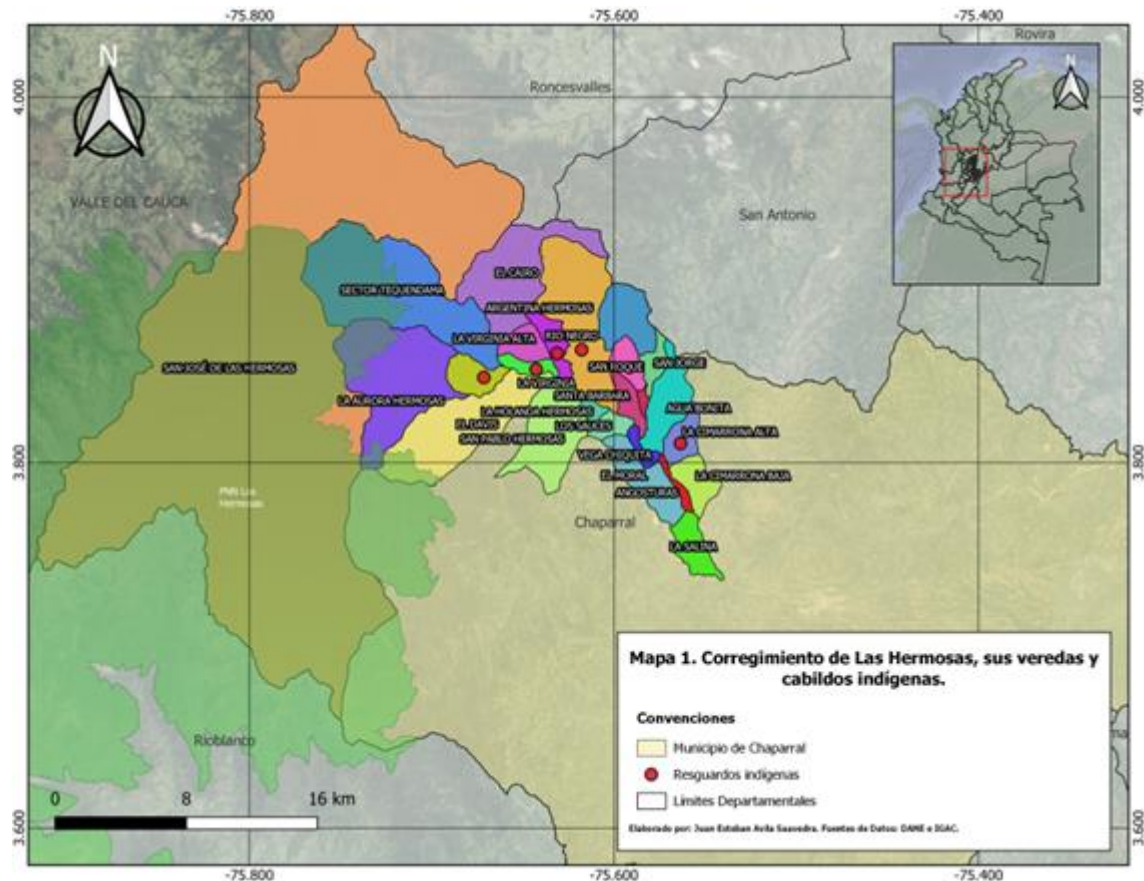
departamentos de Valle del Cauca y Tolima. Hacia el oriente, en el Tolima, una parte importante de las zonas rurales de los municipios de Rioblanco y Chaparral, se encuentran sobre la zona de amortiguamiento del Parque. Allí se concentraron varios de los síntomas más recurrentes en el diagnóstico de la guerra civil en Colombia: pobreza y desigualdad, precariedad-debilidad institucional, control social y territorial de grupos armados, disputas por rentas ilegales derivadas del cultivo y el tráfico de drogas ilícitas, e impactos sobre la territorialidad y el territorio, que han afectado gravemente a la población civil.

El corregimiento de las Hermosas, en el corazón del Cañón, cuenta con una extensión aproximada de 46.701 hectáreas, está dividido en 28 veredas³² y cuatro cabildos indígenas (Pijao Cimarrona Alta, Rionegro, El Escobal y Amoyá Virginia Hermosas)³³. De acuerdo con los datos del municipio, la población del corregimiento alcanza los 7.000 habitantes³⁴ (Mapa 1).

³² Agua Bonita, Alemania, Alto Waterloo, Argentina Hermosas, Aurora Davis, Cimarrona Alta, Cimarrona Baja, Davis Janeiro, El Cairo, El Escobal, El Jardín, El Moral, El Porvenir, El Recreo, Holanda Hermosas, La Angostura, La salina, La Virginia, Los Sauces, Río negro, San Jorge, San Jorge P. Alta, San José de las Hermosas, San Pablo Hermosas, San Roque, Santa Bárbara, Sector Tequendama, Vega Chiquita, Virginia parte Alta. Gobernación del Tolima, Departamento Administrativo de Planeación, *Chaparral en cifras (2000-2010)*, (Ibagué, 2011) 18.

³³ Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, *Plan de Desarrollo 2012-2015*. (Chaparral, 2012), 13-14.

³⁴ No existe información actualizada sobre los aspectos demográficos de las veredas del corregimiento de las Hermosas, por lo que para obtener una información orientativa se recurre a informes como: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos -ILSA., *Las Hermosas, no2. Hidroeléctrica del Río Amoyá y luchas por el territorio*, 1-119, 49.



De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Corregimiento, su proceso de poblamiento se desarrolló paulatinamente a partir de la década de 1930, con un mayor crecimiento entre 1960 y 1970, impulsado principalmente por los procesos de colonización, el desplazamiento producido por distintas violencias y la expansión de la producción cafetera a nivel nacional³⁵. En esta misma época sus habitantes crearon las primeras organizaciones comunitarias, entre ellas el Comité de Cafeteros y las Juntas de Acción Comunal (JAC), desde las cuales promovieron la construcción de obras de infraestructura como carreteras y escuelas, ante la poca iniciativa estatal.

La articulación entre poblamiento y población cafetera hizo que las comunidades estuvieran expuestas a las fluctuaciones de los mercados internacionales. La crisis del café experimentada por el país entre finales de la década de los ochenta e inicios de los noventa del siglo pasado fue un punto de inflexión en las dinámicas del conflicto en la zona. La pérdida de los medios de subsistencia abrió paso a la intromisión de economías ilícitas que fueron generando nuevos arreglos sociales y creando nuevos modos de vida asociados a la ilegalidad y la bonanza económica.

³⁵ Asociación de las Herosas con Desarrollo al Futuro. *Plan de Desarrollo Sustentable del corregimiento las Herosas 2015-2020*, Pontificia Universidad Javeriana, (Chaparral, Tolima, Noviembre de 2014), 1-71, 37.

3.2. Bonanza de la amapola y gobernanza rebelde

Coincidente con la crisis cafetera, a inicios de la década de 1990 Colombia experimentó el boom de la amapola. Debido a sus necesidades medioambientales, este cultivo se concentró en las zonas altas, principalmente en el norte del Cauca y el sur del Tolima. En Las Herosas, la amapola encontró condiciones geográficas apropiadas y brazos para su cultivo. Rápidamente, las intenciones de control territorial por parte grupos armados ilegales asociados al mercado de la mancha³⁶ agudizaron la violencia y convirtieron la región en un espacio de disputa, tanto por las rentas ilícitas como por su posicionamiento geográfico.

El grupo de Carlos Cárdenas, *Los Magníficos*, una estructura paramilitar local, se posicionó en el Cañón y se benefició del cultivo de la amapola aproximadamente desde 1988. Este grupo surgió a mediados de la década de los ochenta y actuó a través de dos patrullas: la primera estaba integrada por las familias de los Cruz y los Aleyes y la segunda, por la familia Osorio Devia. De acuerdo con la Sentencia de la Sala de Justicia y Paz sobre el Bloque Tolima de las AUC, el hacendado y ganadero de la zona de San José de las Herosas en Chaparral, Carlos José Cárdenas Oviedo alias el “pájaro”, se trasladó al Magdalena Medio como resultado de la confrontación entre limpios y comunes a mediados de los años setenta³⁷.

Posteriormente, el Ejército presuntamente organizó las autodefensas en la región a través de tres grupos representativos, como lo fueron los liderados por Ernesto Caleño, Silvio Olivera y Carlos Cárdenas, con el objetivo de combatir a la guerrilla³⁸. De la misma manera que otros grupos de autodefensa:

“Los civiles armados brindaban información al Ejército, en este caso a la Sexta Brigada y al Batallón Caicedo del municipio de Chaparral, sobre la ubicación de la guerrilla en la zona, acompañaban operaciones militares como guías y el líder del grupo - Carlos Cárdenas - facilitaba sus predios para la instalación de bases del Ejército³⁹”.

La disputa por el Cañón -y por las rentas del cultivo de amapola- llevó a las FARC a confrontar a Cárdenas entre 1986 y 1991, suceso conocido por la población civil como “La guerra de las gallinas⁴⁰”. La guerrilla derrotó

³⁶ La mancha o el látex, es el componente activo de la heroína y la morfina que se produce con amapola.

³⁷ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2016, diciembre 7, sentencia priorizada de Atanael Matajudíos Buitrago y otros exintegrantes del Bloque Tolima, 166.

³⁸ Centro Nacional de Memoria Histórica, *De los grupos precursores...*, *Op.Cit.*, 247.

³⁹ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, *Doc.Cit.*

⁴⁰ Este episodio es recordado de esa manera debido a que, cuando los actores armados (guerrilla, paramilitares y Ejército) dieron el orden de que la población civil debía abandonar el corregimiento, “...las familias se desplazaron junto con sus animales, especialmente las gallinas, que en muchos casos tuvieron que dejar en el camino, dado que los carros en los que se transportaron no tenían la capacidad para abordar a toda la población con sus animales ...” Centro de Estudios Regionales, CERE-UT, *Análisis de la complejidad...*, *Op.Cit.*

militarmente a los paramilitares en 1991. Desde ese momento el Cañón se convirtió en una zona de control absoluto de las FARC:

“La consolidación de la presencia guerrillera en la región estuvo acompañada por el fortalecimiento de sus estrategias de dominio y control territorial a través de la imposición de un orden social y político funcional a sus necesidades militares. La guerrilla impuso normas de conducta, reguló las relaciones económicas y sociales, y controló la presencia de propios y extraños en la región. A la *rebelocracia* fariana en el Cañón, la población la denominó -no sin sarcasmo- como *Fiscalía* o *Juzgado 21* [en alusión al frente 21 de las FARC que operaba en la subregión], porque hacía lo que el Estado no: garantizar la seguridad, cobrar impuestos, administrar justicia y regular la convivencia de manera eficiente y efectiva a través de castigos, multas y ajusticiamientos”.⁴¹

Siguiendo a Mampilly, en Las Herosas se resumen las principales condiciones para poder hablar de un *gobierno rebelde efectivo*, a saber: una fuerza capaz de vigilar a la población civil, que establece mecanismos de resolución de disputas, que tiene la capacidad para brindar otros servicios y/o bienes públicos más allá de la seguridad y que genera espacios de retroalimentación para fomentar la participación civil en asuntos *gubernamentales*. También se constatan manifestaciones instrumentales de poder tales como normas, valores, prácticas y creencias, que son clave para la consolidación del dominio⁴².

El descenso de la confrontación generado por la victoria del Frente 21 de las FARC sobre los paramilitares y su hegemonía en el Cañón se vio progresivamente desafiado por la entrada de la Fuerza Pública al territorio a principio de los 2000. La prensa nacional registraba las operaciones de la siguiente manera:

“Esa advertencia se había empezado a materializar en agosto de 2004 con la operación Libertad I, que pretendía recuperar a “sangre y fuego” los territorios del sur del Tolima (Chaparral y Planadas, principalmente). Los conocidos históricamente por haber sido el refugio del Frente 21, las compañías Joselo Lozada y Mariana Campos, y las columnas móviles Héroes de Marquetalia y Daniel Aldana de la guerrilla de las Farc. La arremetida contra la insurgencia arrasó y los campesinos quedaron en medio de una guerra fratricida. El Plan Patriota desplegó en esa zona al Ejército Nacional con todo su aparato. Bajo el mando de la Quinta División aterrizaron las brigadas Sexta y Novena, la Brigada Móvil N° 8, los batallones de contraguerrilla N° 6, 31, 34, 66, 67, 68 y 69, y el Comando de la Fuerza Aérea.”⁴³

A partir de aquí podemos ver cómo, con la entrada de la Fuerza Pública, el gobierno fariano en las Herosas va cediendo paso, así como en todo el sur del Tolima. A los mecanismos de control y regulación efectuados por la guerrilla se sumaron los que llevó a cabo el Ejército, que se caracterizaron por la imposición de restricciones y estrictos controles a la movilidad y la provisión de alimentos hacia el Cañón, y una política de detenciones y judicializaciones de líderes

⁴¹ Andrés Tafur Villarreal, “Frente al Cañón. Guerra y construcción de paz en Las Herosas: un análisis de la resistencia comunitaria, 2005-2010”, (Trabajo fin de máster, Universidad de los Andes, 2021), 44.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Edison Arley Bolaños, *Un nuevo aire en el cañón de Las Herosas*, El Espectador, 12 de febrero de 2017.

comunitarios del corregimiento y comerciantes del municipio de Chaparral. Como consecuencia del desafío a la *rebelocracia* fariana, la violencia selectiva e indiscriminada se intensificó, lo cual produjo graves impactos humanitarios para la población civil⁴⁴.

Además de la militarización, la estrategia de pacificación contempló la entrada en el año 2006 de la empresa estatal de energía ISAGÉN⁴⁵, para la construcción del megaproyecto hidroeléctrico del río Amoyá, en el corazón del Cañón de las Hermosas⁴⁶.

Antes de ISAGÉN, la propietaria del proyecto fue Generadora Unión a través de una filial suya, Hidroger S.A E.S.P, la cual socializó el proyecto durante 2005 con la anuencia de las FARC. Uno de los compromisos más importantes establecidos por la empresa -antes de que le vendiera el megaproyecto a ISAGÉN- fue que se contratara los servicios de seguridad del megaproyecto con los propios pobladores, para evitar la entrada del Ejército a la zona. Sin embargo, este y varios de los compromisos asumidos por Hidroger durante la etapa de socialización del megaproyecto fueron desconocidos por ISAGÉN, una vez inició la etapa de construcción del mismo.

A pesar de los acuerdos pactados con la empresa y la constante búsqueda de garantías de convivencia en el territorio y protección de la población civil, en el año 2006 el Ejército ingresó a la zona y el conflicto se agudizó. En las actas de la Mesa de la Transparencia quedaron registradas las denuncias de los líderes comunitarios en relación con la detonación de artefactos cerca de la población civil, que produjeron daños en la infraestructura del corregimiento y expusieron la vida de la población civil gracias a la detonación de artefactos explosivos de mortero en cafetales, minas, enfrentamientos, ajusticiamientos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones y judicializaciones arbitrarias, ametrallamientos desde

⁴⁴ De acuerdo con el Informe de Riesgo 039-06, del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo: "...La intensificación de los operativos del Ejército Nacional "Libertad II" en las estribaciones de la cordillera central, territorios catalogados como santuarios de la guerrilla; el ingreso de un nuevo grupo armado ilegal autodenominado "Conquistadores del Tolima"; y las acciones defensivas de las FARC configuran el escenario actual de riesgo en el municipio de Chaparral (...) Se prevé la agudización de la confrontación armada y en consecuencia la posibilidad de que ocurra homicidios selectivos, de configuración múltiple, accidentes por minas y/o armas trampas, enfrentamientos con interposición de población civil, utilización de métodos y medios para generar terror e intimidación en la población civil, la destrucción de bienes civiles y/o la afectación de bienes indispensables para la supervivencia, desplazamientos y reclutamientos forzados". Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo 039-06, septiembre 15 de 2006.

⁴⁵ ISAGÉN fue creada en 1995 como una empresa de servicios públicos constituida en forma de sociedad anónima, mixta, especializada en la generación y comercialización de energía. La participación de la Nación pasó de 76,9% en el 2005 a 57,6% en el 2014, y fue finalmente vendida a la multinacional canadiense Brookfield en el año 2016.

⁴⁶ Así lo percibió la comunidad desde el inicio de las operaciones: "...Desde esa vez que empezó lo de ISAGÉN fue que hicieron ese despliegue del Ejército, ahí en el Naranjal. Fue donde tiraron esos soldados ahí, donde bombardearon para hacer las bases, que eso lo limpiaron fue a punta de bombas". Centro de Estudios Regionales, CERE-UT, *Análisis de la complejidad...*, Op.Cit., 81.

helicópteros, daños en cultivos, muerte de animales, o bombardeos indiscriminados, entre otros.

3.3. Mecanismos de resistencia civil

A pesar de la afectación negativa en las comunidades del Cañón de las Hermosas, el conflicto tuvo como impacto positivo la formación de una conciencia organizativa. Como rechazo a la militarización y al accionar violento de los actores, la población organizó marchas y generó espacios de diálogo, como la Mesa de transparencia -MT- y el Observatorio de Derechos Humanos para la Protección del Medio Ambiente, dos escenarios concebidos por las y los líderes comunitarios como una ventana de oportunidad para tener interlocución con los actores armados, en particular la Fuerza Pública⁴⁷.

La MT tuvo la vocación de convertirse en un mecanismo permanente para hacer llegar los diferentes casos de vulneración de derechos humanos y construir herramientas para la prevención de este tipo de actos⁴⁸. Instalado este espacio, rápidamente fue posible llegar a acuerdos sobre la necesidad de desescalar las acciones militares que afectaban directamente a la población civil⁴⁹.

Como escenario paralelo a la MT se constituyó el Observatorio de los Derechos Humanos para la Protección del Medio Ambiente, cuyo propósito era documentar las denuncias que recogían los líderes en cada vereda. A continuación, levantada la documentación, las organizaciones garantes apoyaban la construcción de un documento que se presentaba en la MT. Una vez convocado este espacio de interlocución se procedía a leer el documento elaborado en el Observatorio de los Derechos Humanos y, seguidamente, cada uno de los entes a quienes correspondía la responsabilidad de lo señalado en el documento daban una respuesta o planteaban una solución.

De acuerdo con los habitantes de las Hermosas, inicialmente la MT solo permitió la intervención de aproximadamente dos o tres líderes, lo que infundía

⁴⁷ En principio, se acordó que la MT operaría cada cuatros meses, o cuando las circunstancias lo ameritaran, con participación de autoridades institucionales, civiles y militares; la comunidad, representada por ASOHERMOSAS, una organización de segundo nivel que aglutinaba a todas las Juntas de Acción Comunal de las veredas del corregimiento; la ONG Reiniciar, que acompañó todo el proceso en calidad de garante; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, responsable del monitoreo; y la dirección regional de la Defensoría del Pueblo, que tenía a su cargo la secretaría técnica y brindaba apoyo a las comunidades en la construcción de los documentos del Observatorio. La logística era asumida por ISAGEN, que no participaba en el desarrollo de la Mesa.

⁴⁸ Sandra Carolina Bautista Bautista, “Alternativas analíticas en el campo de la movilización social en Colombia: la acción colectiva de alto riesgo. Lecturas a propósito de la protesta campesina en el Tolima”, *Revista Estudios Políticos*, Universidad de Antioquia, Núm41 (2012), 57-79.

⁴⁹ “...Y entonces en esa Mesa de Transparencia exponíamos el tema de la limitación al paso de alimentos y eso fue un alivio pero lo logramos hasta que nos dejaban pasar los alimentos, y nos dejaron pasar (...), entonces ya eso nos daba como el poder, el saber cómo eran las cosas y llegábamos y arreglábamos en la Mesa de la Transparencia y que listo...”. Centro de Estudios Regionales, CERE-UT, *Análisis de la complejidad...*, Op.Cit., 111.

temor a la comunidad en términos de la comunicación, no solo por las autoridades a quienes se dirigían, sino también por la presión de la guerrilla (quienes los acusaban de ser informantes). Con el tiempo, la comunidad logró ampliar la participación en este espacio que reconocen como propio, y de manera simultánea aumentar su empoderamiento, logrando así construir acuerdos que les permitieran exigir las garantías de sus derechos. Sumado a lo anterior no solo se amplió la participación en la MT, sino también los temas que allí se abordaban, direccionando la MT hacia un espacio más integral en búsqueda del desarrollo de la región.

En línea con la teoría de la autonomía civil en las guerras civiles de Kaplan, las capacidades desplegadas por la población campesina en las Hermosas, inicialmente en términos de *acción colectiva de alto riesgo* a través de las movilizaciones y las protestas, y, posteriormente, a través de plataformas organizativas más estables orientadas a la interlocución con los actores armados, se pueden interpretar como mecanismos civiles de resistencia, funcionales a la protección de la población.

Los primeros, basados en la cohesión y la solidaridad, menos premeditados o duraderos. Y los segundos, caracterizados por la emergencia de organizaciones y mecanismos formales basados en una cooperación profunda y sostenida y orientada hacia la protección. Este es el caso de la experiencia de la Mesa de la Transparencia y el Observatorio de Derechos Humanos para la Protección del Medio Ambiente.

Desde el punto de vista del balance de estos dos mecanismos, particularmente de la Mesa de la Transparencia, se propone un análisis a partir de la consecución de sus objetivos mediatos (detener las victimizaciones, promover la convivencia) y finales (cesar la violencia, y reparar los daños ocasionados por el conflicto) en el corto y mediano plazo.

En el corto plazo, de acuerdo con los líderes entrevistados en este trabajo, la MT garantizó efectivamente la protección de los derechos humanos. Al asegurar el diálogo y la rendición de cuentas de las autoridades civiles y militares *de igual a igual* con los líderes sociales, fue notable el descenso de las victimizaciones, particularmente por violaciones al principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario. Esto, según defensores de derechos humanos, tendría que ver con el importante grado de visibilización que tenía la Mesa⁵⁰.

Desde el punto de vista de la convivencia, aunque en el corto plazo la Mesa de la Transparencia *per sé* no podía transformar la dinámica de una guerra que la sobrepasaba, en el mediano y largo plazo, constituyó un modelo de diálogo social

⁵⁰ “...al sentir los actores, principalmente los actores estatales, que habría digamos un espacio de observación de denuncia permanente, por supuesto habría un poco más de control y de cuidado y de vigilancia por parte de la Fuerza Pública en su actuación...” Andrés Tafur Villareal, “Frente al Cañón. Guerra...”, *Op.Cit.*, 83-84.

y construcción de paz, que es reconocido por los defensores de derechos humanos, para quienes, la posibilidad de hablar en medio del conflicto entre actores fue clave⁵¹. Frente a los objetivos finales, en el mediano plazo, la MT no logró su propósito, básicamente porque la reparación no dependía de ella misma, sino de las entidades estatales que eran convocadas al espacio y que, para algunos líderes, fueron menores ante las expectativas de las comunidades⁵².

Conclusiones

Tanto el territorio como la población del corregimiento de las Hermosas en Chaparral (Tolima) fueron afectados de diversas maneras por la presencia de actores armados y las confrontaciones derivadas de esta. A su vez, esta zona fue el epicentro de iniciativas oficiales y no oficiales de paz, las cuales produjeron efectos contradictorios. A lo largo de este artículo se pueden identificar dos modelos de pacificación durante la guerra: el modelo estatal, desde arriba, y el modelo comunitario, desde abajo.

El intento de pacificación llevado a cabo por el modelo estatal lo identificamos en la construcción de un proyecto de paz en el marco de una estrategia de *ocupación integral* del territorio, que vinculó la acción cívico militar con el desarrollo del megaproyecto de la hidroeléctrica sobre el río Amoyá. Esta estrategia no solo no logró pacificar el territorio, sino que tampoco consiguió resolver los problemas particulares que pretendía atender, ya que el Ejército no pudo diezmar a la guerrilla. La salida de este grupo del Cañón se dio a finales del 2016, en el marco del Acuerdo Final de Paz con las FARC.

Por otra parte, el megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Amoyá, presentado a la comunidad como la fórmula para resolver la pobreza y el abandono de la zona, fue visto por los pobladores y por algunos líderes políticos como un negocio lucrativo para la empresa, que eventualmente apoyó a las organizaciones con algunos recursos, pero que no representó ninguna ventaja comparativa concreta para la región ni para la población.

⁵¹ “...En términos de construcción de paz, el mayor aporte fue digamos mitigar los efectos más nefastos de la guerra en esa región, y tal vez mostrar un modelo de una especie de potencial democracia directa, ¿no?, para ese tipo de comunidades que en el sistema de manejo de poder colombiano están absolutamente marginalizados...” *Ibid.*, p. 85

⁵² Según algunos de los testimonios: “...Eso nos dio buen resultado, cuando yo hablo que eso nos dio muy buen resultado porque todo lo que se hizo y fue bueno, es para todo mundo acá, porque se logró que esa situación, la detención de tantos líderes se mermara un poco, se le diera las soluciones a eso. Hubo una cosa que nunca pudo pasar que se le diera una respuesta a las violaciones que ya habían sucedido. Eso lo pedíamos muchas veces lo presentábamos en todos los espacios y nunca se le pudo dar una solución...” Observatorio de Paz y Derechos Humanos, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, *Contextos explicativos del desplazamiento...*, *Op.Cit.*, 97.

“...En ese aspecto no se pudo hacer nada [...], muchas de las muertes en veces de gente inocente que uno conocía no se pudo dar ninguna solución, agresiones o por ejemplo bombardeos que hicieron mataron unos semovientes, dañaron una escuela, no se le pudo dar solución a eso, eso es un archivo grandísimo...” Centro de Estudios Regionales, CERRE-UT, *Análisis de la complejidad...*, *Op.Cit.*, 97.

Desde abajo, hemos evidenciado como la comunidad fortaleció sus espacios organizativos para poder mediar entre todos los actores. Desde la Mesa de Transparencia, la propia sociedad civil, en un principio a través de sus líderes, pero después de forma masiva, posicionó las violaciones de derechos humanos de lado y lado y mandó un mensaje de neutralidad a los actores armados, el cual le permitió ganar un espacio de interlocución con las autoridades estatales que anteriormente no tenía.

Esta pacificación desde abajo, por supuesto ha tenido sus limitaciones. Los impactos y huellas que dejan las dinámicas de conflicto armado en la población son muy difíciles de cambiar. La cultura que se crea alrededor de los roles violentos genera costumbres, hábitos y concepciones muy opuestas a los comportamientos que se generan cuando hay un tejido social fuerte. No obstante, los resultados promovidos por estos mecanismos de resistencia civil representan una puerta de esperanza en etapas de posconflicto y procesos de construcción de paz como el que vive el país.

Bibliografía

Alcaldía Municipal de Chaparral Tolima, *Plan de Desarrollo 2012-2015*, Chaparral, 2012.
<https://repositoriocdim.esap.edu.co/handle/123456789/15588?show=full>

Aponte, Andrés. *Grupos armados y construcción de orden social en la esquina sur del Tolima, 1048-2016*. CINEP, EDUCAPAZ, Universidad Javeriana, Bogotá, 2019.

Arjona, Ana. *Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War*. Cambridge: University Press, 2016.

Arjona, Ana, Kasfyr, Nelson y Mampilly, Zacariah. *Rebel Governance in Civil War*. Cambridge: University Press, 2015.

Arrázola, María del Rosario. *La nueva Casa Verde de las FARC*, El Espectador, 17 de octubre de 2009. <https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-nueva-casa-verde-de-las-farc-article-167236>

Asociación de las Herosas con Desarrollo al Futuro. *Plan de Desarrollo Sustentable del corregimiento las Herosas 2015-2020*, Pontificia Universidad Javeriana, Chaparral, Tolima, Noviembre de 2014.
https://www.academia.edu/42705739/Plan_de_Developmento_Sustentable_del_Corregimiento_de_Las_Herosas_2015_2030

Ávila, Juan Esteban y Navarro, Geraldine. *Construcción de Estado, guerra civil y orden social en el corregimiento de las Herosas, Chaparral-Tolima 1991-2016*. Universidad del Tolima. Ibagué. 2022.

Arley Bolaños, Edison. *Un nuevo aire en el cañón de Las Herosas*, El Espectador, 12 de febrero de 2017, <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/un-nuevo-aire-en-el-canon-de-las-herosas-article/>

Bautista Bautista, Sandra Carolina. “Alternativas analíticas en el campo de la movilización social en Colombia: la acción colectiva de alto riesgo. Lecturas a propósito de la protesta campesina en el Tolima”. *Revista Estudios Políticos*, Universidad de Antioquia, Núm41 (2012).

Centro de Estudios Regionales, CERE-UT, *Análisis de la complejidad socio-ecológica del Tolima: identificación de los vínculos entre paisaje, socioeconomía y conflicto armado*. Informe de investigación CERE, n°1, Universidad del Tolima, Ibagué, noviembre de 2020.

Centro de Estudios Regionales, CERE-UT, *Dinámicas de la violencia del conflicto armado en las Herosas – Chaparral, Tolima (1986-2016)*. Informe de investigación CERE, n°3, Universidad del Tolima, Ibagué, enero 2021.

Centro Nacional de Memoria Histórica, *Guerrilla y población civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013*, Bogotá, mayo 2014. <https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-poblacion-civil.pdf>

Centro Nacional de Memoria Histórica, *De los grupos precursores al Bloque Tolima. Informe N. 1 Serie sobre los orígenes de los grupos paramilitares de las regiones*. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017.

Defensoría del Pueblo, Informe de riesgo 039-06, septiembre 15 de 2006

Fundación ideas para la paz (FIP), *Institucionalidad socavada. Análisis transversal*, Bogotá, 2015. <https://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/571e341292cb8.pdf>

Gobernación del Tolima, Departamento Administrativo de Planeación, *Chaparral en cifras (2000-2010)*, Ibagué, 2011.

Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos - ILSA., *Las Herosas, no2. Hidroeléctrica del Río Amoyá y luchas por el territorio*, 1-119. <https://issuu.com/ilsaenred/docs/tolima>

Kalyvas, Stasis, *La lógica de la violencia en la guerra civil*, Madrid, Akal, 2006.

Kaplan, Oliver. *Resistir la guerra: o como se protegen a sí mismas las comunidades*, Traducción Enrique Valenzuela Grueso. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2020.

Mampilly, Zacariah. *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life During War*. New York: Cornell University Press, 2011.

Observatorio de Paz y Derechos Humanos, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, *Contextos explicativos del desplazamiento forzado en el sur del Tolima. Impactos sobre el territorio y la territorialidad 1958-2018*. CODHES, Bogotá, 2020.

Presta Novello, Déborah, *El conflicto de Colombia. Acción de las Organizaciones internacionales*, Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2020.

Presta Novello, Déborah, “Crisis humanitaria en la Triple Frontera Amazónica: retos de desarrollo sostenible”. *Anales de Derecho*. 39. 2022.

Red RINDE, *Fortalecimiento de la descentralización. El gran reto de Colombia 2010-2014*, Noviembre 2013. https://www.rimisp.org/wpcontent/files_mf/1399570773Estadodelartedescentr

Tafur-Villarreal, Andrés. “Víctimas y disputas: el saldo de la violencia paramilitar y contrainsurgente en el Tolima (Colombia)”. *El diario de la educación*. 2020.

<https://eldiariodelaeducacion.com/educacion-por-la-paz/2020/12/30/victimas-y-disputas-el-saldo-de-la-violencia-paramilitar-y-contrainsurgente-en-el-tolima-colombia/>

Tafur-Villarreal, Andrés y Mejía Baldión, Alejandro. “Limitantes y posibilidades para la reparación transformadora de los daños comunitarios generados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado de población. El caso del Sujeto de Reparación Colectiva de Ataco, Tolima”, en Olarte Delgado, Angela Marcela y Gutiérrez Quevedo, Marcela (editoras), *Cátedra Unesco Derechos Humanos y Violencia: Gobierno y gobernanza*. Publicaciones Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2021.

Tafur-Villarreal, Andrés. “Frente al Cañón. Guerra y construcción de paz en Las Herosas: un análisis de la resistencia comunitaria, 2005-2010”. Trabajo fin de máster, Universidad de los Andes 2021. <http://hdl.handle.net/1992/55082>

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2016, diciembre 7, sentencia priorizada de Atanael Matajudíos Buitrago y otros exintegramentes del Bloque Tolima.

Ugarriza, Juan Esteban y Pabón, Natalhie. *Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958-2016*. Bogotá, Universidad del Rosario, 2018.

Uribe Sarmiento, John Jairo, Rodríguez Fernández, Iokiñe y Baquero Melo, Jairo. *Paces desde abajo. Desafíos y oportunidades de otra paz*. Ed. Universidad del Rosario. 2022.